



### **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.**

Medellín, seis (06) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

**DEMANDANTE:** WILLIAN DE JESUS RAMIREZ LOPEZ.  
**DEMANDADO:** PROTECCION S.A. y COLPENSIONES.  
**TIPO DE PROCESO:** ORDINARIO.  
**DECISIÓN:** **REVOCA, CONFIRMA Y ADICIONA.**

En la fecha, **EI TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados Nancy Gutiérrez Salazar, Carlos Alberto Lebrún Morales y María Eugenia Gómez Velásquez, se reunió para revisar el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones y la Consulta en su favor, frente a la Sentencia proferida en el Proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor **WILLIAN DE JESUS RAMIREZ LOPEZ**, en contra de **PROTECCION S.A.** y de **COLPENSIONES**.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en los términos del poder obrante a folios 173 a 175 del expediente, se reconoce personería para actuar en representación de COLPENSIONES, a la Sociedad PALACIO CONSULTORES S.A.S representada por el Dr. FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI, quien a folio 172 sustituye el poder en la abogada LEIDY VERÓNICA GONZÁLEZ LÓPEZ, con Tarjeta Profesional 196.444 del C.S. de la J., procediendo La Sala a reconocerle personería para actuar en los términos de la referida sustitución.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA:**

#### **COLPENSIONES.**

Presenta escrito en el que luego de transcribir lo dispuesto en los artículos 20, inciso 2° de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, 60 literal f de la primera norma referida y 39 del Decreto 656 de 1994, expone los mismos argumentos propuestos en la sustentación del recurso de apelación; adicionando que la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y comisiones, deben ser devueltos debidamente indexados al momento del traslado de los recursos.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

## **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.**

### **ANTECEDENTES**

#### **PRETENSIONES:**

- Declarar la Ineficacia del traslado del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-.
- Condenar a PROTECCIÓN S.A. a devolver a Colpensiones las cotizaciones con sus correspondientes rendimientos financieros; y a esta última entidad a admitir al demandante y recibir tales conceptos.

#### **HECHOS:**

- Dijo que nació el 24 de octubre de 1958.
- Que cotizó al ISS hasta el 9 de agosto de 1995, cuando se trasladó a PROTECCIÓN S.A., sin que se le suministrara la información necesaria sobre el traslado.

#### **CONTESTACIÓN:**

Se opusieron a las pretensiones.

#### **PROTECCIÓN S.A.**

- Dijo no ser cierto que al demandante no se le haya suministrado toda la información necesaria al momento de la afiliación.
- Excepciones de mérito: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción y aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones.

#### **COLPENSIONES.**

- Admitió la afiliación del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPMPD.
- Excepciones de mérito: improcedencia de declarar la ineficacia y/o de la afiliación de la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad, inexistencia de la obligación de reconocer la afiliación al RPM por falta de legitimación en la causa por pasiva, devolución de cuotas de administración, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en Costas.

**SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Declaró la Ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS. Ordenó a PROTECCIÓN S.A. trasladar al demandante al RPMPD y devolver todos los valores que haya recibido con motivo de la afiliación de este, como cotizaciones completas, bonos pensionales, frutos, intereses, ahorros voluntarios y rendimientos causados, con excepción únicamente de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración; a COLPENSIONES a reactivar la afiliación del actor y a recibir todos los dineros que le sean trasladados. Declaró probada la Excepción de inexistencia de la obligación de devolver los dineros por concepto de cuotas de administración de las cuentas de ahorro individual del actor y no probada la de prescripción; y Condenó en Costas Procesales a Protección S.A., absolviendo de tal condena a COLPENSIONES.

**APELACIÓN COLPENSIONES.**

Dice que las cuotas de administración que cobra la Administradora del RAIS en virtud de la afiliación del cotizante obligatorio al sistema de pensiones, son un ingreso propio en favor de la generación de su patrimonio, por lo que al declararse nula o ineficaz la afiliación del demandante a tal régimen, tales dineros conjuntamente con sus rendimientos generan un enriquecimiento sin justa causa en su favor y en desmedro de Colpensiones, ya que esta última nunca tuvo en su haber la administración de esas sumas dinerarias, las cuales hubieran servido a efectos de capitalizar el Fondo de naturaleza común.

**CONSIDERACIONES DE LA SALA**

- **Objeto:** Determinar si en el caso a estudio, es o no procedente la declaración de Ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado por el demandante al RAIS; y las consecuencias que de ello se derivan. Veamos:

En el caso concreto, el demandante se afilió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, inicialmente al ISS hoy COLPENSIONES, desde el **26 de septiembre de 1977**, según se infiere de la Historia Laboral de fl. 17; trasladándose al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través del Fondo privado de pensiones PROTECCIÓN S.A. el **9 de agosto de 1995**, según consta en la solicitud de vinculación de folio 10 y en el reporte SIAFP de folio 104.

Respecto al tema de la Ineficacia de traslado de régimen pensional, conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Cas. Laboral, vertida en Sentencias Radicados 33.083 del 22 de noviembre de 2011, y 46.292 del 03 de

septiembre de 2014, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, y más recientemente en las Sentencias Laborales 1452 del 3 de abril de 2019, Rad 68852 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo y 1421 del 10 de abril del mismo año, Rad. N.º 56174 M.P. Gerardo Botero Zuluaga, para los casos de afiliados, las Administradoras de Fondos de pensiones tienen el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculan a ellas, que surge desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de la afiliación, por lo que el engaño en el que incurre la entidad, tiene su fuente en la falta al deber de información, tanto en lo que se afirma, como en lo que se omite informar sobre lo que resulte relevante para la toma de la decisión que se persigue, independientemente que para el momento del traslado, una norma lo exija o no.

Ahora, respecto a la firma del formulario proforma, en la Sentencia Laboral 1688 del 8 de mayo de 2019, Rad. N.º 68838, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, dicha Corporación sostuvo que:

“... no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada”.

“... la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «*la afiliación se hace libre y voluntaria*», «*se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones*» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no *informado*...”

En similar sentido, se pronunció dicha Corporación en Sentencia Laboral 4360 del 9 de octubre de 2019, Rad 68852, M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, era PROTECCIÓN S.A. la que tenía la obligación de probar en el proceso que brindó una asesoría personalizada y completa al demandante al momento de su traslado de régimen, analizando las circunstancias particulares de su caso, debiéndole informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993, actualizado con el IPC-, debe seguir cotizando, si es o no beneficiario del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de

tomar la decisión de traslado, para que la misma sea realmente consensuada, libre y voluntaria y otras tantas observaciones al respecto.

Y es que debe reiterarse que la labor del funcionario del Fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “DEBER DEL BUEN CONSEJO”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral; en la medida que es responsabilidad de dichas Administradoras y de sus promotores, velar por la información realmente suministrada a sus usuarios -art. 10 Decreto 720 de 1994 por el cual se reglamentaron los arts.105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993-; lo cual fue reiterado en el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2255 de 2010, que le impone a las Administradoras de Fondos de pensiones, en desarrollo de tal deber, la obligación de proporcionar a los consumidores financieros información completa, así como los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de la decisión de traslado de régimen.

Ahora, si bien PROTECCIÓN S.A. afirmó al contestar la demanda que al demandante se le brindó la asesoría requerida para el caso –fls 56 a 88-, de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita tenía la carga de acreditarlo, y sin embargo, no aportó prueba de la información suministrada al demandante al momento del traslado; y sin que en criterio de la Sala, con los comunicados de prensa de folios 118 a 120 -generales e ilegibles por demás-, ni con la constancia de reasesoría pensional realizada al actor el 29 de septiembre de 2010 –fl. 96-, se pueda dar por ratificado el acto inicial de traslado de régimen pensional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 898 del Código de Comercio, pues como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado de régimen pensional, y no con posterioridad al mismo –Sentencia Laboral 1688 de 2019 antes citada, en la que se reitera lo expuesto en la también citada Sentencia 19447 de 2017-.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió una de las solemnidades legalmente previstas para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, como lo es el deber de información en un asunto tan importante para un afiliado por su incidencia en el derecho pensional, trayendo como consecuencia la declaración de Ineficacia del traslado de régimen, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes del mismo, como que el demandante nunca se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Consecuente con lo anterior, se **CONFIRMARÁ** lo decido por la juez de instancia al respecto.

### **TRASLADO DE SALDOS.**

Considera la Sala que al declararse la Ineficacia del traslado de la demandante del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante; por lo que es legítimo que PROTECCIÓN S.A. traslade a Colpensiones el 100% de los aportes obligatorios efectuados por el demandante, esto es, cotizaciones completas y rendimientos, tal como lo concluyó el juez de instancia, pero incluyendo además, los gastos de administración, las primas de seguros de invalidez y sobrevivencia, la prima de reaseguros de Fogafín y los aportes al Fondo de solidaridad pensional -garantía de pensión mínima-, que se hubieren causado durante el tiempo en el que el actor estuvo afiliado a dicha Administradora. Lo anterior, según lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral desde la Sentencia Radicado 31.989 del 9 de septiembre de 2008, M.P. Eduardo López Villegas, y más recientemente en las Sentencias Laborales 4.989 y 4.964 del 14 de noviembre de 2018, Radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, y en la 1.688 del 8 de mayo de 2019, Radicado 68.838 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

Y es que no comparte La Sala la postura adoptada por el juez de instancia en torno a las cuotas de administración, ya que si bien del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 se desprende que del valor mensual de la cotización un porcentaje se destina al pago de tal concepto, lo cierto es que ante la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, al volver las cosas al estado en el que se encontraban antes del mismo, estas no se pueden generar en favor de las Administradoras de Fondos de pensiones demandadas, y sin que tal reintegro dependa de la gestión realizada, la pérdida de la especie, el detrimento del bien, o de la equivalencia de los rendimientos.

Adicional a ello, La Sala se permite resaltar que el precedente judicial proveniente de los máximos órganos de cierre tanto de la justicia constitucional como de la justicia ordinaria, vincula a los demás jueces, es decir, es de obligatorio cumplimiento, al tenor de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la SU 354 del 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escruce Mayolo, en la que manifestó:

“Según lo consagrado en los artículos 234, 237 y 241 de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, como tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, al igual que la Corte Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la supremacía e integridad de la Carta, tienen el deber de unificar la jurisprudencia al interior de sus jurisdicciones, de tal manera que los pronunciamientos por ellas emitidos se conviertan en precedente judicial de obligatorio cumplimiento...”

(Otra Providencia en similar sentido, es la SU 611 del 4 de octubre de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

Tal obligación deberá cumplirse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia –artículo 16 Decreto 692 de 1994-.

Consecuente con todo lo expuesto, se entrará a **REVOCAR, CONFIRMAR y ADICIONAR**, la sentencia de instancia en tales aspectos.

Se **CONFIRMARÁ** así mismo la orden dada a Colpensiones de recibir las sumas provenientes de PROTECCIÓN S.A. para financiar la pensión de vejez del actor.

Sin Costas Procesales de Segunda Instancia, dada la prosperidad del recurso interpuesto.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### **DECIDE**

**PRIMERO: REVOCAR, CONFIRMAR y ADICIONAR** el numeral segundo de la Sentencia proferida por el **Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín el 15 de noviembre de 2019**, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por el señor **WILLIAN DE JESUS RAMIREZ LOPEZ**, en contra de **PROTECCION S.A.** y de **COLPENSIONES**, en cuanto que la primera demandada deberá efectuar a la segunda, la devolución del 100% de los aportes obligatorios del demandante ordenados en la sentencia de primera instancia, pero incluyendo además, los gastos de administración, las primas de seguros de invalidez y sobrevivencia, la prima de reaseguros de Fogafín y los aportes al Fondo de solidaridad pensional -garantía de pensión mínima\_ que se hubieren causado durante el tiempo en el que la actora estuvo afiliada a dicha demandada. Todo ello, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, según las consideraciones de esta sentencia.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en los demás.

**TERCERO:** Sin Costas Procesales en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** y se firma en constancia.

Los Magistrados,



**NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR**

**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –  
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N° 078 de mayo 07 de 2021

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>